



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00418
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: PEDRO NICOLÁS TRUJILLO TRIANA
OPOSITOR: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL

En el presente asunto, **PEDRO NICOLÁS TRUJILLO TRIANA**, promueve demanda en contra de la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL**, con la finalidad de obtener la reliquidación y pago de la pensión de jubilación.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, este despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. *La designación de las partes y sus representantes.*
2. *Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
3. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
4. *Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. *La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

i. Del derecho de postulación.

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

“Artículo 160. Derecho de postulación. *Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Cogido General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

“Artículo 74. Poderes. *Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.*

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales

deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (...)

Negrillas del Despacho

Analizado el expediente se hace necesario incoar al profesional del derecho, a fin de que determine e identifique claramente los actos administrativos susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y señalar para el efecto, las facultades con las que actúa dentro del presente proceso. Lo anterior en razón a que el acto administrativo acusado en las pretensiones de la demanda, y el acto administrativo dispuesto en el poder otorgado a la apoderada judicial, son totalmente distintos.

ii. De las normas violadas.

De conformidad con el numeral 4° del artículo 162 del C.P.A.C.A., la demanda debe contener *“Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.”*

Bajo el anterior precepto, y una vez analizado el expediente¹, encuentra el Despacho que en la demanda, no se indicaron ni especificaron, en debida forma, las normas violadas y su concepto de violación.

iii. De la estimación racionada de la cuantía.

El artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Adicionalmente al definir nuestro legislador la competencia en razón de la cuantía determino unas condiciones especiales para su fijación, en efecto establece la norma:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se

¹ Folios 4 a 6 del plenario.

reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Pues bien, los apoderados de la parte actora, al realizar los planteamientos en torno a la fijación de la cuantía, dentro del escrito de demanda, determinaron lo siguiente:

“Las mesas de asignación mensual por sustitución de retiro equivalentes al 50% dejadas de percibir desde el momento del fallecimiento del extinto señor Patrullero DIEGO JAVIER TRUJILLO, el cual fue el 27 de octubre de 2000, hasta la presentación de esta demanda.

Teniendo en cuenta la liquidación de pensión realizada por el Área de prestaciones sociales de la Policía Nacional se estima hasta el año 2013 un total de \$90.803.808.

Con base en los haberes percibidos en el año 2013 se estima para el 2014 la suma de \$8.216.335, para el año 2015 la suma de \$8.549.270, para el 2016 \$9.195.866, para el año 2017 \$9.839.534 y finalmente para el año 2018 la suma de \$10.420.102.

Su señoría considerando que los daños materiales causados a mi mandante son de ciento treinta y siete millones setenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos (\$137.069.964) aproximadamente, estimación que tiene asidero en las sumas de dinero dejadas de percibir desde el momento del fallecimiento del señor Patrullero DIEGO JAVIER TRUJILLO a la fecha de presentación de esta demanda, y los perjuicios de orden material derivados del hecho de haber dejado de percibir la pensión de asignación de retiro del causante. ²

Así las cosas, y una vez analizado el escrito de demanda, en relación a la estimación razonada de la cuantía, la parte actora la estima en **\$137.069.964**, desbordándose así de la competencia por parte de este Despacho, es decir, se superan los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos para efectos de determinar la competencia en virtud de este factor. No obstante, se observa que en la misma, se tazaran periodos fuera de los últimos 3 años contados a partir del momento de la radicación del medio de control.

² Folios 7 y 8 del plenario.

Recuérdese que la cuantía debe calcularse desde **cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda sin que supere los tres años**, y **sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Corolario de lo anterior, este Despacho, desde ya, dispondrá a **remitir por competencia**, en razón a la estimación de la cuantía, el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Pedro Nicolás Trujillo Triana.

iv. De la dirección de notificaciones judiciales

De conformidad con el numeral 7° del artículo 162 del C.P.A.C.A., la demanda debe contener *“El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”* Analizado el escrito de demanda, observa el Despacho, que en el capítulo de notificaciones, no se indica en debida forma la dirección de correo electrónico de las partes.

Así las cosas, es deber de la parte actora indicar el lugar y dirección en donde, tanto el demandante como el demandado, de manera directa, puedan recibir notificaciones.

Pues bien, en razón a la parte motiva de la presente providencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011³, se tiene que, el competente para conocer el presente asunto es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en virtud del factor cuantía, y por ello, se ordenará su remisión a la referida Corporación.

Por lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E

PRIMERO.- Declarar que este juzgado carece de competencia para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por **PEDRO NICOLÁS TRUJILLO TRIANA**, contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL**

SEGUNDO.- Remitir el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –

³ Art. 152.- Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Reparto, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

TERCERO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

CA

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
